

Subordinación, más que amistad en las relaciones Colombia-Estados Unidos

María del Pilar Ostos Cetina

Tras el colapso de la Unión Soviética, la mayoría de los gobiernos en el mundo y particularmente en América Latina se han decidido, y en otros casos, se han visto obligados por diversas razones, pero muy específicamente frente a sus debilidades económicas y sociales, a optar por el patrón político estadounidense de la *democracia*, cuyos mecanismos y tácticas que se han dado a conocer desde la década de los ochenta a través de lo que fue el Consenso de Washington, las Cumbres Presidenciales y los numerosos documentos que se emiten desde el Coloso del Norte como mandatos hegemónicos para la región.

De este modo, los gobiernos que se acogen al modelo democrático abandonan, según sea el caso, sus viejas prácticas políticas para convocar a elecciones populares en la que los civiles pueden aspirar a los cargos de poder, recibir financiamiento con dinero público y/o privado para sus campañas políticas, utilizar los medios de información para expresar su plataforma política, así como formular proclamas en las que se manifiesta el respeto por las garantías individuales y la defensa colectiva de los derechos

María del Pilar Ostos Cetina é Professora da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Autónoma de México (UNAM) e doutoranda em Relações Internacionais pela mesma universidade. No primeiro semestre de 2006, o NUPRI e o Departamento de Ciência Política da USP tiveram o prazer de recebê-la como pesquisadora visitante.

humanos; los cuales son entre otros aspectos los que supuestamente identifican el ejercicio democrático guiado por los estadounidenses en estos últimos tiempos.

En este mismo contexto habría que subrayar la importancia que han cobrado en ciertos países los regímenes *conservadores*, empezando por Estados Unidos que desde que se inició la Era de Reagan en los ochentas, a diferencia del mandato del demócrata, Bill Clinton, se ha caracterizado por la aplicación del más puro conservadurismo encabezado por la derecha del Partido Republicano, tomando como pretexto los valores de la libertad y la democracia para justificar sus intereses e intenciones políticas.

Otros países que actualmente se guían por la misma corriente ideológica son, por ejemplo, los gobiernos de Gran Bretaña, México, Colombia, entre otros que comparten los mismos principios y valores propuestos por Estados Unidos sobre democracia y libertad como mecanismos para legitimarse y estar del lado del poderío hegemónico estadounidense.

En este sentido, el caso de los gobiernos en Colombia de finales del Siglo XX hasta la actualidad, indistintamente de que sean dirigidos por partidos políticos guiados por las facciones Liberal o Conservador, coinciden en la necesidad de ajustarse ideológicamente a los principios de la democracia avalados por Estados Unidos. Esto mismo se refleja en los discursos que emite cada gobierno, en los que persiste la idea de alcanzar la democracia y la seguridad como banderas de una sola estrategia común para el orden y la paz interna del país, pero que sólo es una justificación

más para afirmar sus intereses particulares y no los de la nación colombiana.

Así, el actual Presidente en Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010) desde su lema de gobierno: “*seguridad democrática*”, reitera su compromiso y coincidencia con la estrategia de gobierno de Estados Unidos cuando señala: “la seguridad democrática no es más que una política integral a largo plazo, ...cuyo objetivo principal es garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos... es la defensa de los valores democráticos... que se han visto amenazados en los últimos años por fenómenos como el terrorismo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”¹, que a la luz de las autoridades del gobierno colombiano y de Estados Unidos no representan ninguna opción política ni de Estado, lo que las convierte indistintamente en agrupaciones armadas y delictivas a pesar de que en sus inicios se hayan podido plantear algún objetivo de tipo ideológico-político o social que justificará su oposición al Estado central en Colombia.

Desde este punto de vista, la estrategia de *seguridad democrática* en Colombia, promovida por estos gobiernos conservadores en Colombia, tiene un alto contenido *militar*, mediante el cual se pretende la recuperación de la soberanía, el control y el monopolio de la fuerza del Estado por medio del re-posicionamiento de la Fuerza Pública para garantizar el orden, la estabilidad política y social del país en lugares que han quedado a merced de las organizaciones armadas y del narcotráfico. Y con ello, se pretende por parte del gobierno actual una mayor “interacción” entre las instituciones del Estado y la ciudadanía para que

La estrategia de *seguridad democrática* en Colombia tiene un alto contenido militar, mediante el cual se pretende la recuperación de la soberanía en lugares que han quedado a merced de las organizaciones armadas y del narcotráfico.

mediante estímulos y recompensas², se logre una cooperación mucho más eficaz que permita la captura de todos aquellos que infringen la ley, el orden y la seguridad de todo el conglomerado social en el país.

Bajo estos criterios, la dirigencia política colombiana insiste en acompañar el proceso de *democratización* al lado del componente *militar*; que conlleva a facultar cada vez más al Ejecutivo y por ende, a la Fuerza Pública, para tomar medidas preventivas y de control sobre la población y los grupos opositores a la dirigencia estatal.

Otra justificación al binomio *democracia* y *militarismo* en Colombia, que son contradictorios y se niegan mutuamente, se puede analizar a partir de los cuantiosos recursos que se destinan en los últimos tiempos al rubro de seguridad, formando un *circulo vicioso* en el que participan además de las Fuerzas Armadas de Colombia y otras

instituciones estatales, compañías transnacionales particularmente estadounidenses, las cuales ofrecen diferentes servicios desde la venta armamento, insumos y pertrechos hasta adiestramiento en contrainsurgencia, combate a las guerrillas y al narcotráfico.

Es así como el Plan Colombia, considerado un “plan para la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, financiado básicamente por recursos estadounidenses a favor del combate a la guerrilla y el narcotráfico, han permitido al gobierno colombiano intensificar desde finales de los años noventa, su carrera armamentista, los entrenamientos y las actividades encaminadas a la captura de guerrilleros, terroristas, narcotraficantes, grupos paramilitares, así como también han manifestado abiertamente su deseo de continuar con los programas para la erradicación de más del 50% de las áreas dedicadas a los cultivos de coca y amapola (calculadas en 122.000 hec. en 2002).

Frente a esta subordinación de la clase política colombiana hacia las estrategias internacionales de Estados Unidos, resulta cada vez más complejo y difícil que en el *corto o mediano* plazo prospere una *negociación política* o un acercamiento de diálogo efectivo entre el gobierno colombiano y los grupos guerrilleros, justamente por que las no se visualiza una política autónoma, soberana y con una auténtica voluntad política para solucionar el conflicto armado colombiano que ya tiene más de cuatro décadas de existencia.

Más sin en cambio, la continuidad de las doctrinas militaristas de la actual dirigencia estadounidense – la Doctrina Bush y la Estrategia Nacional de Seguridad –, por citar algunas, que se fundamenta en medidas pragmáticas y no de consenso, ni mucho menos de apego al derecho internacional tal como se evidenció luego de sus incursiones armadas en Afganistán e Irak; que plantean una mayor escalada del conflicto

armado colombiano, cuyas repercusiones parecen colarse hacia los países vecinos, cada vez más involucrados en los problemas de seguridad interna de Colombia.

De los acuerdos políticos al terreno económico

En materia económica, lo cierto es que, la “tercera etapa de la economía global o de la globalización”, como se denomina a la expansión y penetración de las empresas transnacionales, especialmente norteamericanas, en la economía interna de los países, adquiere a partir de finales de los setentas y principios de los ochentas una nueva peculiaridad; ya no solamente penetran y se asientan en nuestros países, hablando de América Latina, aprovechando las ventajas que los gobiernos dieron para impulsar el proceso de industrialización, por substitución de importaciones, como sucedió en las dos primeras etapas, sino

que reemplazan a las compañías nacionales, las desnacionalizan, para captar de modo más ágil los recursos económicos, la atención y preferencia de los consumidores locales, así como las ganancias adicionales generadas por la mano de obra barata, etc³.

En tal sentido, Colombia no es la excepción en la región y pronto se vio inmersa en una serie de procedimientos necesarios para abrir su economía al mundo exterior a través de la privatización de varias de sus empresas nacionales, flexibilizar los trámites de ingreso y salida de capitales extranjeros, la reducción de aranceles y protecciones para la importación de insumos y demás bienes, entre otros aspectos que, en apariencia, hacían mucho más competitiva y atractiva la economía colombiana en esos momentos de acuerdo con las fórmulas lanzadas por el Consenso de Washington (1986) y los organismos internacionales como: el AGAAC/GATT, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Así fue cómo el *neoliberalismo*, sustento ideológico de la globalización, o sea, de la suplantación, reemplazo o asimilación de las empresas nacionales por las norteamericanas, que se perfiló en 1980, continuó su carrera vertiginosa en Colombia, y esta tomó mayor impulso a principios de los noventa con la privatización de numerosas empresas estatales, la reducción de aranceles y una serie de reformas de ajuste fiscal, tributarias y hasta constitucionales para favorecer no sólo el ingreso de inversiones foráneas, sino la compra a precios de remate de las empresas nacionales, extranjerizándose así la economía nacional.

En Colombia, la adopción de estas políticas de corte neoliberal en lugar de mejorar y atender la crítica situación de pobreza y marginación, resolver el problema del desempleo, reactivar el sector agrario, impulsar la modernización de los sectores productivos del país, sanear las finanzas y el presupuesto de la nación, contrariamente a las promesas y al discurso esperanzador de los primeros gobiernos tecnócratas en Colombia, en la década de los noventa, poco a poco se enfrentaron a una prolongada *recesión económica*⁴, que se manifestó en el déficit público y en la caída de la producción económica que condujo al país a depender del endeudamiento externo.

Este último aspecto, el de la deuda externa, no se puede analizar de forma separada a la apremiante necesidad que tienen los gobiernos en Colombia de acudir al crédito externo para detener el déficit interno y a su vez, destinar una parte de estos recursos al rubro de seguridad como una forma de otorgar mejores garantías al inversionista extran-

Cuadro 1 Compromiso de recursos para Colombia (2000-2001)

Em millones de dólares

Estados Unidos	830
Red de emergencia social, crédito blando BID, BM y CAF	900
BID, BM y CAF, créditos ordinarios	300
Naciones Unidas	131
España	100
Japón - Crédito Blando	70
Noruega	20
Unión Europea (em forma de acuerdos bilaterales, por fuera del Plan Colombia)	280

Fuente: El Plan Colombia y la internacionalización del conflicto. Bogotá: IEPRI - Universidad Nacional de Colombia, 2001, p. 113.

jero y a las empresas transnacionales para que éstos puedan establecerse en el territorio colombiano y de este modo, soslayar la solución de los problemas nacionales: pobreza, desempleo, falta de servicios públicos y obras de infraestructura, entre otros, que no se han podido superar.

Por esa razón, la financiación de proyectos como el Plan Colombia forma parte de esa nueva modalidad de otorgamiento de préstamos, en los que participan países desarrollados con algún interés geoestratégico, así como organismos y bancos internacionales; que al tiempo que conceden el crédito al país receptor lo condicionan mediante fórmulas de ajuste, concesiones en la explotación de recursos vitales y otros que aplican mecanismos para preservar y ensanchar los intereses extraterritoriales como son: el Congreso de Estados Unidos, el FMI, el BID, entre otros. El Cuadro 1 señala los compromisos del gobierno colombiano en fechas recientes.

Asimismo, la dirigencia actual en Colombia se ha visto en la necesidad de aplicar medidas adicionales de ajuste para los contribuyentes como las que adelanta el Ministerio de Hacienda, que planea recaudar en una primera etapa cerca de 780 mdd, mediante la aprobación de un impuesto del 1.2 % a los patrimonios de más de 58,000 dólares. Además de otras aportaciones que se han denominado: bonos de guerra por 600 mdd, y recortes en nómina en ministerios y entidades públicas, lo que implicó el cierre de algunos consulados y representaciones diplomáticas en el exterior, calculado en 264 mdd, entre otras medidas que agobian a la sociedad colombiana en general que debe asumir estos compromisos; ésto con el fin cumplir los propósitos del gobierno de fortalecer y modernizar las Fuerzas Armadas y activar la campaña de sustitución de cultivos ilícitos, materia para la fabricación de la droga, como objetivos prioritarios para la ejecución del Plan Colombia, que

impulsa y financia principalmente Estados Unidos con aportaciones, armamento y entrenamiento como se detalla en Cuadro 2.

Lo anterior explica por qué el encargado de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, durante el primer mandato del Presidente Uribe Vélez, el Embajador Luis Alberto Moreno, quien se mantuvo en su cargo desde la anterior Administración con el Presidente Pastrana, sostuvo que la prioridad de Colombia debía ser la firma de un acuerdo bilateral en materia económica con Estados Unidos, mismo que para febrero de 2006 se concretó tras la firma de un Tratado de Libre Comercio. Y que entre otras razones, coincide con el constante apoyo de Colombia hacia Estados Unidos, tal como se dio con su voto para que éste último invadiera Iraq, marcando así su compromiso y apoyo irrestricto a la expansión hegemónica de ese país y más aún reconoció la prioridad de agilizar la firma de acuerdos bilaterales⁶, dejando en un segundo plano la conformación del ALCA; que según afirmaba Moreno, estarían detenidos por la posición del Mercosur, principalmente de Brasil; lo que hacía poco probable que el ALCA estuviera consolidado para el 2005 como se tenía previsto⁷.

Las anteriores actitudes explican también la postura del gobierno colombiano frente a la relación que mantiene con sus vecinos, tal como sucedió en la Cumbre de países Andinos (2003) celebrada en territorio colombiano, en la cual se notaron marcadas diferencias entre sus dos principales países: Colombia y Venezuela, en la que el primero favorece el esquema del ALCA propuesto por Estados Unidos y la celebración de posibles acuerdos bilaterales con este último país; mientras que el segundo propone consolidar un esquema multilateral de integración entre países de la región sin la inclusión de Estados Unidos, al estilo del Mercosur.

Otro aspecto crucial que marcó la subordinación económica de Colombia frente a Estados Unidos, tiene que ver con el uso de los recursos energéticos. Así, la Alianza

o la Ley del Congreso norteamericano que posibilitó la ayuda militar a Colombia, se explicita entre sus objetivos: “insistir para que el gobierno colombiano complete las reformas urgentes destinadas a abrir completamente su economía a la inversión y el comercio exterior, particularmente a la industria del petróleo...”⁸ Atendiendo esta petición, el Presidente Uribe se ha encargado de minimizar el papel de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), que además de administrar más del 50% de las ganancias obtenidas por la exploración de gas y crudo en el país, se encargaba de supervisar los pagos de regalías a la nación por parte de compañías extranjeras. Esta situación obviamente generó una serie de reclamaciones por parte del sindicato petrolero de la Unión Sindical Obrera (USO), de mayor tradición e importancia en el país; sin embargo, la iniciativa gubernamental y de las compañías transnacionales se colocó por encima de las demandas de los trabajadores.

Al respecto, los trabajadores advierten que con la aplicación de dichas medidas del gobierno y las transnacionales, la situación del petróleo tiende a equipararse con lo ocurrido con otros recursos geoestratégicos como: el carbón y el níquel, en los que intervinieron compañías extranjeras, entre ellas: Billington, la Drummond, la Glenco y Anglo-american dejando “exiguas regalías al país y modestos salarios de los trabajadores. Por lo que en el caso de las reservas de crudo y gas, la política del actual mandatario colombiano afianza la toma de la industria petrolera nacional a manos de las transnacionales Chevron Texaco, Exxon-Mobil, Amoco-BP, Occidental y Shell”⁹.

De este modo, el petróleo, por encima de la erradicación de los cultivos de hoja de coca y amapola, se ha convertido en el principal objetivo geoestratégico y económico de Estados Unidos. En ese contexto, América Latina, tanto por su cercanía geográfica como por sus reservas energéticas, es una de las regiones del mundo que estará bajo el ojo vigilante de Washington. Actualmente, Venezuela es el tercer proveedor de Estados Unidos, México, el cuarto y Colombia, el séptimo.

En ese mismo sentido, el Secretario de Energía de Estados Unidos, Abraham Spencer, señaló que: “el Presidente Bush reconoce no sólo la necesidad de un incremento en el suministro de energía, sino también el papel crucial que tendrá el hemisferio en la política energética del gobierno”¹⁰ Lo que explica que, Washington y especialmente sus empresas transnacionales, se proponen incrementar las exploraciones en las zonas dedicadas a la producción de hidrocarburos en Colombia, sin embargo, las ambiciones de éstos se ven algunas veces, obstaculizadas por las acciones emprendidas por las guerrillas locales, que suelen emplear tácticas como: el daño de instalaciones o plantas de explotación del crudo y de infraestructura

Cuadro 2 Asistencia de Estados Unidos al Plan Colombia⁵

En millones de dólares

Período	Ayuda Militar	Otra ayuda	Total
1988-1996	N/D	N/D	765,00
1997	88,56	0	88,56
1998	112,44	0,50	112,49
1999	308,81	5,75	314,56
2001	785,56	208,00	993,56
2002 (estimada)	220,15	5,65	225,80
2003	508,49	154,80	663,29

Fuente: www.ciponline.org

(oleoductos, principalmente) necesarios para el transporte del crudo hacia los puertos de embarque. Eso aclara la aprobación de un préstamo de 100 millones de dólares, otorgado por el Congreso estadounidense para proteger el principal oleoducto del país, Caño-limón-Coveñas, ubicado en el departamento de Arauca, en inmediaciones con la frontera de Venezuela, el cual se encarga de transportar el crudo desde ésta área considera una de las zonas más ricas hasta los puertos de embarque en el Caribe Atlántico.

Así, la generosidad estadounidense responde más a las presiones de las compañías como: Occidental Petroleum (OXY), EXXON-Mobil, la British Petroleum, Unocal, Texaco, y Phillips Petroleum, que han invertido más de 25 millones de dólares desde 1996 haciendo cabildeo en el Congreso para que ayuden a proteger zonas en Colombia con importantes reservas de hidrocarburos que ellos explotan.

En consecuencia, la lógica de Washington consiste en proveer de recursos al Estado colombiano, quien los acepta de muy buena manera, a fin de intensificar la actividad contraguerrillera para aumentar en el futuro la producción petrolera en su beneficio y al mismo tiempo, garantizar su intervención en los asuntos internos de los países en su área de influencia.

Asimilación de Colombia de la doctrina hegemónica de defensa y seguridad estadounidense

Los cambios en el Sistema Internacional con el fin de la era bipolaridad, particularmente en las cuestiones de seguridad, van a tomar un nuevo matiz al trascender de la simple persecución del “enemigo comunista” desaparecido y concretar una estrategia mucho más amplia en la que se incluye a partir de la década de los noventa al narcotráfico y al terrorismo como factores de inestabilidad y de amenaza para la seguridad nacional y mundial.

La lógica de Washington consiste en proveer de recursos el Estado colombiano para aumentar en el futuro la producción petrolera en su beneficio y, al mismo tiempo, garantizar su intervención en los asuntos internos de los países en su área de influencia.

Ahora bien, el gobierno colombiano se incorpora a esa nueva estrategia de seguridad impulsada por el “policía mundial”, Estados Unidos, al reconocer que el problema interno de seguridad no sólo era ocasionado por la guerrilla comunista, sino que además se ha convertido en un serio problema vinculado con las redes del narcotráfico, la delincuencia común, el paramilitarismo y el terrorismo. Esa misma situación ha impulsado a la dirigencia colombiana con Uribe Vélez, a abogar por un cambio en los mecanismos de operación de la doctrina de seguridad hemisférica, “con el argumento de que la guerrilla y el

tráfico de drogas son una amenaza para las democracias latinoamericanas”. Por lo que, Uribe sugiere “modernizar” el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) creado en 1947, más conocido como Tratado de Río, del que México se retiró el 6 de septiembre del 2002 alegando que era un instrumento obsoleto y que de continuar, debería enfocarse a la atención de desastres naturales, inundaciones y epidemias. Frente a lo cual, el gobierno colombiano sugiere un enfoque distinto en el cual, la cooperación militar en la región ponga énfasis en el combate de grupos guerrilleros, terroristas y de mafias dedicadas al narcotráfico.

Esto significa una reconceptualización de la *seguridad* en el hemisferio, que el gobierno colombiano intenta impulsar al lado de Estados Unidos y otros países latinoamericanos que se sumen a esta iniciativa, la cual emerge de las propias condiciones que se dan con la “internacionalización” del conflicto armado colombiano.

Al respecto, algunos países en el Continente se han unido a esta iniciativa, entre ellos: Ecuador, que ha reforzado las medidas de seguridad en la frontera y ha cedido la base de Manta al personal militar estadounidense para monitorear la zona.

Por su parte, Chile permanece expectante, sin condenar categóricamente a Washington y apoyando, de hecho, el Plan Colombia. Argentina, formalmente respalda la paz, pero no hace mucho por Colombia ni censura a Estados Unidos.

Al contrario, Venezuela ha fortificado los límites fronterizos que comparte con Colombia, desplegando mayor presencia militar y controles migratorios para impedir el paso constante de guerrilleros, paramilitares y personas que buscan refugiarse de la violencia ocasionada en el territorio colombiano.

Brasil ha hecho lo mismo al incrementar notablemente en los últimos años dispositivos militares fronterizos a través del avanzado Sistema de Vigilancia para la Amazonía SIVAM¹¹ (en sus siglas en inglés), que consiste en un moderno radar bajo una estricta estrategia de control y vigilancia de la zona por parte de las Fuerzas Armadas de Brasil para evitar el paso de guerrilleros y de narcotraficantes al interior de su territorio.

Ahora bien, mientras la dirigencia colombiana impulsa esta campaña de defensa de la seguridad en la región y además, recibe la “asistencia” militar y el financiamiento de las autoridades estadounidenses para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, se presenta un doble juego político. Por un lado, algunos sectores en Estados Unidos señalan que, el Ejército colombiano mantiene vínculos con organizaciones paramilitares, algunas de las cuales son financiadas por capital privado y de empresas transnacionales para operar en el país y que además cometen delitos que atentan

contra los derechos humanos de la población; y por otro, el Ejecutivo colombiano está obligado a firmar un acuerdo mediante el cual se exonere al personal militar estadounidense, que entrena a las Fuerzas Armadas colombianas, de cualquier delito de lesa humanidad o de crimen de guerra practicado en territorio colombiano. Evitando así, que sus militares puedan ser enjuiciados ante la Corte Penal Internacional. Al mismo acuerdo se tuvieron que adherir países como: Israel y Rumania.

Esta misma situación de subordinación en la toma de decisiones de la dirigencia colombiana frente a los intereses norteamericanos se observa también, en el bloqueo que Estados Unidos hizo para impedir la compra del Gobierno

de Uribe de 24 aviones Super Tucano fabricados en Brasil, calculados en 234 millones de dólares.

Los hechos antes señalados comprueban una vez más la debilidad estatal y el escaso margen de autonomía y soberanía que demuestran las instituciones políticas en Colombia para negociar y sobre todo, para resolver sus problemas internos. Este ha sido pues, uno de los puntos cruciales en los que la guerrilla fundamenta su razón de erigirse como un Estado beligerante, defensor de las causas sociales, de la recuperación de la soberanía y de la autonomía que han ido cediendo los gobiernos de la oligarquía a países extranjeros como Estados Unidos.

Notas

¹ Ver más en: http://www.mindefensa.gov.co/politica/politica20030629lanzamiento_documento_politica_seguridad_democratica.html

² El Presidente Uribe anunció crear los “Lunes de las recompensas” para estimular a la población a cooperar con su plan de seguridad, que busca poner freno al conflicto armado. Agregó que la identidad de quienes entreguen información relativa al orden público será mantenida en reserva para garantizar su seguridad. Ver más detalles en: Diario Milenio. “Uribe pondrá en marcha ‘lunes de recompensas’”. 27 de agosto de 2002. <http://www.milenio.com/nota.asp?id=41441>

³ Varias de estas medidas de corte neoliberal impulsado por Estados Unidos entre los países Latinoamericanos se dieron a conocer a través del Consenso de Washington en 1986.

⁴ Los actuales indicadores económicos exhiben una elevada tasa de desempleo del 20%, haciendo que 59,8% de la población colombiana se encuentre por debajo de la línea de pobreza y presente una deuda externa calculada en 40.000 millones de dólares (mmd), que representa el 48% del PIB.

⁵ Parte de la ayuda se ha invertido en: 30 helicópteros Huey UH-1H, 42 Super Huey, 18 Black Hawk, entrenar y dotar una brigada contra el narcotráfico de 3000 hombres, ubicada en Santa Ana (Putumayo) y la de Tres Esquinas (Caquetá). Además de poner en marcha una brigada fluvial de la Armada con 32 unidades de 5 lanchas artilladas cada una. Ver más en: http://eltiempo.terra.com.co/judi/2002.../ARTICULO-PRINTER_FRIENDLY-PRINTER_FRIENDLY-171345.HTM

⁶ Al respecto, en los primeros meses del 2004 se iniciaron formalmente las negociaciones para establecer un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Perú. Ver más detalles: Correa, Jorge. “Colombia rechazó borrador del TLC que ya traían listo negociadores de Estados Unidos”. Periódico El Tiempo. Bogotá, Colombia. 23 de mayo de 2004. (versión en internet).

⁷ “Prioridad de Colombia es firmar acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos”. Periódico *El Tiempo*, 4 de septiembre de 2003. http://eltiempo.terra.com.co/econ/2003-09-05/ARTICULO-PRINTER_FRIENDLY-PRINTER_FRIENDLY-1242270.htm.

⁸ Ver más en el documento en Internet de Gustavo Triana, “Uribe Vélez impuso una reforma petrolera de corte colonialista”. Secretario de Asuntos Energéticos de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT. http://www.deslinde.org.co/Dsl34/Gustavo_Triana.htm. Y en, Wainer, Valeria y Stefanoni, Pablo. “Colombia: ¿Nuevo escenario de la guerra global?”. En *Rebelión*, 18 de mayo del 2002. Versión en Internet.

⁹ Las mismas son hoy dueñas de cerca de 500 millones de barriles de reservas de crudo y de 1.768 giga pies cúbicos, GPC, de gas natural. Pero, hacia el futuro, terminarán apoderándose del potencial hidrocarbúrico del país, que hoy el gobierno estima en más de 40 mil millones de barriles. Asimismo, las trasnacionales controlan también el 80% de la distribución mayorista de combustibles y aproximadamente el 20% de la distribución minorista, en la cual han desplazado a los inversionistas nacionales dado que, la política que liberó los precios de los combustibles en Colombia, les otorgó a estas compañías extranjeras unos márgenes exorbitantes de utilidad por la distribución y comercialización de hidrocarburos.

¹⁰ Palabras del Secretario de Energía de Estados Unidos. Abraham Spencer durante la quinta Conferencia Ministerial de Iniciativa Energética, realizada en México el 8 de marzo de 2001. ver más en http://www.lainsignia.org/2002/abril/ibe_072.htm

¹¹ Sobre el tema se recomienda: Bitencourt, Luis. “Security issues and challenges to regional security cooperation: a brasilian perspective”. En, *Strategic Studies Institute, U.S. Army War College*. “Perspectives from Argentina, Brazil, and Colombia. Julio de 2003. versión en Internet. www.carlisle.army.mil/ssi/index.html.